



---

**Recurso de reposición, subsidio apelación // 2023-00146.**


---

Desde Samuel David Rojas Ariza <sdrojas@redlegal.co>

Fecha Mar 1/07/2025 9:00 AM

Para Juzgado 01 Civil Municipal - Boyacá - Tunja <j01cmunicipaltun@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC lady17114 <lady17114@gmail.com>

 1 archivo adjunto (500 KB)

Recurso de reposición, subdisio apelación 2023-00146.pdf;

Doctora,

**DIANA PATRICIA ROJAS RODRÍGUEZ**

Jueza

Juzgado Primero Civil de Municipal de Oralidad de Tunja

[j01cmunicipaltun@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j01cmunicipaltun@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

**Ref.:** Proceso ejecutivo de suscripción de documentos presentado por **ELISINDA PÉREZ** en contra de **ADOLFO MARTÍNEZ NEIRA**.

**Exp. No.:** 150014053001-2023-00146-00.

**Asunto:** Recurso de reposición, subsidio de apelación.

Cordial saludo,

Por medio del presente escrito me permito presentar recurso de reposición, subsidio de apelación en contra del auto del 26 de junio de 2025, notificado en estado del 27 de junio de la misma anualidad, de conformidad con los argumentos expuestos en el documento adjunto al presente correo electrónico.

Adicionalmente, de la presente comunicación se remite copia al correo electrónico de la apoderada del ejecutado, Dra. Lady Yazmín Chivatá, al correo electrónico [lady17114@gmail.com](mailto:lady17114@gmail.com).

Atentamente,



Samuel Rojas Ariza  
Abogado  
 312 473 3943

[redlegal.co](http://redlegal.co) 

Doctora,  
**DIANA PATRICIA ROJAS RODRÍGUEZ**  
Jueza  
Juzgado Primero Civil de Municipal de Oralidad de Tunja  
[j01cmunicipaltun@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j01cmunicipaltun@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
E. S. D.

**Ref.:** Proceso ejecutivo de suscripción de documentos presentado por **ELISINDA PÉREZ** en contra de **ADOLFO MARTÍNEZ NEIRA**.

**Exp. No.:** 150014053001-2023-00146-00.

**Asunto:** Recurso de reposición, subsidio de apelación.

---

Actuando como apoderado judicial de la parte actora dentro del proceso ejecutivo con radicado interno No. 2023-00146, de conformidad con el auto proferido por su honorable despacho del día 26 de junio de 2025, notificado a través de estado No. 23 del 27 de junio de la misma anualidad, por medio del presente escrito me permito presentar recurso de reposición, subsidio de apelación a este en los siguientes términos:

## **1. PRETENSIONES.**

### **1. 1. Principal.**

**PRIMERA.-** REPONER el auto de fecha 26 de junio de 2025 en el sentido de decretar las pruebas solicitadas por el demandante en el escrito que descurre traslado de las excepciones de mérito propuestas por el demandado.

### **1. 2. Subsidiaria.**

**PRIMERA.-** En caso de negar la reposición, conceder apelación dentro del presente asunto.

## **2. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS.**

El artículo 318 del Código General del Proceso dispone que “salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez”. Adicionalmente, en el inciso segundo del mismo artículo se dispone que “[c]uando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.”

Teniendo en cuenta que el auto es del 26 de junio de 2025, notificado en estado del 27 de junio de la misma anualidad y al tratarse de un auto resuelto por escrito, el presente recurso se interpone en debida forma y tiempo.

Adicionalmente, de acuerdo al numeral 2 del artículo 322 del CGP: “La apelación contra autos podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición”,

entendido en conjunto con el numeral 3 del mismo artículo que dispone que “en caso de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó la providencia, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación”.

Circunstancias que se encuentran dentro del presente medio impugnatorio que se solicita la reposición y, en caso de ser contraria, se conceda el recurso de apelación. Siendo estos presentados en los términos dispuestos por la ley para tales fines.

### **3. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS.**

#### **3. 1. Existencia de un título ejecutivo con obligación clara, expresa y exigible.**

Obra en el expediente el Acta de Conciliación No. 2313 del 29 de abril de 2019, suscrita por las partes en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja, en la que el demandado Adolfo Martínez Neira se obligó de manera clara y expresa a:

1. Transferir el 100% del derecho real de dominio sobre el inmueble de matrícula inmobiliaria No. 070-104219 a favor de la señora Elisinda Pérez Pineda.
2. Levantar la afectación a vivienda familiar existente sobre el mismo.

**SEXTA:** Convienen las partes que el día viernes seis (6) de septiembre de 2019 será elevada a escritura pública la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho en la Notaría Segunda de Tunja, a las 3.00 p.m., asumiendo conjuntamente los gastos de escrituración y cada quien los de registro y boleta fiscal que les corresponda, momento en el cual se hará el traspaso del vehículo aquí adjudicado a favor del señor ADOLFO MARTINEZ NEIRA, identificado con placas UQT-891 y se procederá a cancelar la afectación a vivienda familiar existente sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria N° 070-104219 de la oficina de Registro de instrumentos públicos de Tunja.

Dicho documento cumple a cabalidad los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, pues contiene una obligación clara, expresa y exigible, presta mérito ejecutivo y, por disposición del artículo 78 de la Ley 446 de 1998, hace tránsito a cosa juzgada.

Además, el artículo 4 de la Ley 258 de 1996 establece que “*Artículo 4. Levantamiento de la afectación.* Ambos cónyuges podrán levantar en cualquier momento, de común acuerdo y mediante escritura pública sometida a registro, la afectación a vivienda familiar.” Lo que da a entender que los cónyuges podrán disponer de común acuerdo el levantamiento de la limitación al dominio. Situación plasmada en el acuerdo conciliatorio.

Adicionalmente, el cumplimiento de dichos requisitos no fue controvertido por la contraparte al no presentar recurso de reposición ni fue expuesto por esta en las excepciones perentorias planteadas.

Por lo tanto, se está dando un alcance normativo y judicial no previsto en la Ley y restando efectos a un acta de conciliación que presta mérito ejecutivo y que no fue controvertida por la contraparte en su contenido y formalidades.

### **3. 2. El proceso ejecutivo no pretende el levantamiento autónomo del gravamen, sino el cumplimiento de la obligación pactada.**

No se trata de un intento de suprimir el gravamen por vía incidental, sino de ejecutar un acto autónomamente asumido por el obligado. Es decir, no se está discutiendo la procedencia del levantamiento per se, sino la ejecución de un acto voluntario, formalizado en una conciliación con fuerza vinculante, mediante la cual el demandado asumió expresamente la obligación de gestionar y otorgar dicho levantamiento. Máxime teniendo en cuenta que la constitución de dicha afectación fue en favor de quienes suscribieron la conciliación. Razón por la cual se encontraban en posibilidad de conciliar dicha situación jurídica.

Existe una indebida valoración por su despacho al entender que se pretende una ejecución *forzada* cuando, exclusivamente, se está pretendiendo el cumplimiento de lo dispuesto en un acta de conciliación.

En este sentido, el levantamiento no requiere una nueva valoración judicial o prueba adicional, porque ya fue decidido, reconocido y aceptado por el obligado en un procedimiento de resolución alternativa de conflictos.

### **3. 3. Principio de buena fe, eficacia procesal y cosa juzgada.**

La negativa del despacho desconoce principios esenciales del proceso:

- 1) Buena fe procesal y confianza legítima: el incumplimiento de un acuerdo conciliatorio celebrado hace más de cinco años, sumado al silencio procesal frente al gravamen desde la radicación del proceso en 2023, compromete la seguridad jurídica de quien confió en el cumplimiento de lo pactado.
- 2) Tránsito a cosa juzgada: como lo establece el artículo 78 de la Ley 446 de 1998 y lo ha reiterado la Corte Constitucional, el acta de conciliación tiene efectos equivalentes a una sentencia judicial en firme. Desconocerla implica un desconocimiento del principio de legalidad y del carácter ejecutorio del título.
- 3) Eficacia procesal y economía: ordenar ahora un nuevo proceso declarativo o verbal sumario para obtener lo ya pactado representa una dilación innecesaria, afecta gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva y vacía de contenido el mecanismo de conciliación extrajudicial como medio legítimo de solución de conflictos.

### **3. 4. El tiempo transcurrido: una demora injustificada que vulnera principios y derechos fundamentales.**

Han transcurrido más de dos años desde la radicación del presente proceso ejecutivo (2023), sin que se haya emitido decisión definitiva ni se haya cumplido lo pactado en el acta de conciliación. A ello se suma que la afectación a vivienda familiar que ahora se invoca como obstáculo era anterior al inicio del proceso y no fue objeto de observación ni oposición oportuna durante la admisión de la demanda, ni por parte del juzgado ni del demandado.

Este prolongado trámite vulnera de forma directa los principios constitucionales de eficacia y eficiencia en la administración de justicia, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, que obligan a las autoridades judiciales a asegurar decisiones oportunas y útiles frente a los fines perseguidos.

Del mismo modo, se afecta el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (artículo 229 CP), en tanto se obstaculiza el cumplimiento efectivo de un acuerdo con fuerza de cosa juzgada, suscrito ante un mecanismo legítimo de resolución de conflictos reconocido por el ordenamiento jurídico.

Permitir que el obligado dilate el cumplimiento de lo pactado con maniobras procesales o se refugie en formalidades que él mismo se comprometió a remover (como lo es el levantamiento del gravamen), atenta contra la seguridad jurídica y desalienta el uso de mecanismos alternativos como la conciliación, en abierta contradicción con los fines del Estado Social de Derecho.

Atentamente,



**SAMUEL DAVID ROJAS ARIZA**  
**C. C. 1.082.944.935 de Santa Marta.**  
**T. P. 376.246 del C. S. de la J.**